

Expediente 170 y 171/2019

Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación de “Servicios para la realización de cursos y campus deportivos de la Dirección General de Deportes, en la temporada 2019/2020”, con número de expediente C-336A/008-18 (A/SER-011797/2018), de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.

Con fecha 7 de marzo de 2019 se han recibido en este Tribunal sendos escritos de don Enrique Merino Pérez, en nombre y representación de la entidad mercantil Ebone Servicios Educación Deporte, S.L. (en adelante Ebone), y doña María Dolores Díaz Rodríguez, en nombre y representación de la entidad mercantil Innovaser 360, S.L. (en adelante Innovaser), solicitando, con carácter previo a la interposición del recurso, la adopción de medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de referencia, contra la decisión de la Mesa de Contratación celebrada con fecha de 8 de febrero de 2019, por la que se acuerda *“la exclusión de las ofertas presentadas por Jc Madrid Deporte y Cultura, S.L., Innovaser, Ebone, y Salzillo Servicios Integrales, S.L.U.”* publicada en el perfil de contratante el 18 de febrero de 2019.

El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, sin que contra este acuerdo de acumulación proceda recurso alguno, siendo de aplicación al recurso especial en materia de contratación según prevé el artículo 56.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1276518928440753551941**

Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Igualmente, el artículo 13 del Reglamento de los Procedimientos Especiales de Revisión de Decisiones en Materia Contractual y de Organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (RPERMC), prevé la posibilidad de acordar la acumulación de dos o más recursos en cualquier momento previo a la terminación, tanto de oficio como a solicitud del recurrente o de cualquiera de los interesados.

Este Tribunal considera necesaria la acumulación de los expedientes 170/2019 y 171/2019 por apreciarse identidad en el asunto, al tratarse del mismo expediente de contratación, siendo coincidentes el órgano de contratación, el tipo de acto, incluso presumiblemente los motivos de impugnación.

Las solicitantes alegan que la decisión de la Mesa de contratación adoptada en la mencionada sesión de 8 de febrero de 2019 perjudica sus intereses legítimos, impidiéndoles continuar el procedimiento, por lo que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la LCSP, instan que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso que van a interponer.

El 7 de marzo este Tribunal dio traslado al órgano de contratación para que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LCSP efectuara las alegaciones que considere oportunas en relación con las medidas solicitadas, en el plazo de dos días hábiles desde su recepción. El 12 de marzo de 2019 se recibe en este Tribunal informe del órgano de contratación relativo a las solicitudes de adopción de medidas provisionales solicitando su desestimación, alegando que las recurrentes no se ajustaron al modelo de proposición económica establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.



Compete a este Tribunal decidir sobre la suspensión del procedimiento de adjudicación al estar las solicitantes de la medida cautelar legitimadas por ser licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicación y ser su objeto, importe y plazo susceptible de recurso especial.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar



la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, se impugna la resolución de exclusión del procedimiento de adjudicación, cuando el estado avanzado en la tramitación del expediente coloca al mismo en una fase de propuesta de adjudicación, siendo posible llegar a la adjudicación del contrato con anterioridad a la resolución del recurso.

Este Tribunal, aun no considerando suficientemente fundamentadas las solicitudes previas de suspensión, considera que debe garantizar que no se celebre la contratación sin que se haya decidido sobre el fondo del asunto, para evitar posibles prejuicios a las partes, atendiendo a las alegaciones formuladas por las citadas empresas en los respectivos escritos de interposición de recurso especial en materia de contratación, que han presentado el 11 de marzo de 2019 ante este Tribunal. Las recurrentes alegan que el PCAP requiere que la proposición económica se formule indicando un único porcentaje de reducción aplicable a los dos precios/hora de licitación, sin embargo, el sistema de licitación electrónica generó un documento en pdf ajustado al modelo facilitado al sistema por el órgano de contratación, por lo que no puede imputarse el defecto de la oferta al licitador, excluyendo su oferta y sin posibilidad de aclaración. Por otra parte, en el supuesto de que no se estimase la pretensión, sería mínimo el posible retraso que la tramitación del recurso pudiera suponer en la contratación del servicio.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados



afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad:

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de “Servicios para la realización de cursos y campus deportivos de la Dirección General de Deportes, en la temporada 2019/2020”, con número de expediente C-336A/008-18 (A/SER-011797/2018), de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

